

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Los municipios evitan el ajuste necesario

Los alcaldes fijan mínimos ahorros en altos cargos y asesores en sus planes de austeridad Pretenden arreglar las cuentas de los consistorios mediante subidas de tasas e impuestos

Los cargos políticos municipales no están dispuestos a renunciar a la mayor parte de su estructura actual, pese a que su sobredimensionamiento ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos a la situación de casi quiebra técnica. Pese a que la deuda de los 8.120 consistorios es ya de 35.420 millones de euros, los 2.305 que se han acogido al plan de pago de proveedores han presentado unos planes de ajuste en los que evitan realizar importantes recortes en empresas, entes públicos, altos cargos y asesores, y fían esencialmente su austeridad al aumento de tasas e impuestos locales.

El Gobierno no ha facilitado aún los detalles de los planes de ajuste que han presentado los ayuntamientos para poder acogerse a la línea crediticia del plan de proveedores, pero de su balance global se desprende una cierta improvisación y muchas dudas sobre su grado de cumplimiento. Esencialmente por la falta de ambición de los alcaldes a la hora de reducir los gastos estructurales de los consistorios, a pesar de la virulencia de la crisis, del elevado déficit y de la insostenible situación de las cuentas municipales.

Las cifras presentadas ni siquiera coinciden con las que maneja el Ejecutivo. Por ejemplo, en el Programa de Estabilidad del Estado que el Gobierno ha enviado a Bruselas figura un ajuste entre gastos e ingresos de 39.245 millones, mientras que en el Plan Nacional de Reformas, también remitido a Bruselas, constan 43.959 millones, casi 5.000 millones más.

Así, los 2.305 ayuntamientos que han recibido el sí a sus planes de viabilidad (sólo ha aprobado la mitad de los que se presentaron al plan), han sido excesivamente ambiciosos en materia de ingresos (todos prevén la subida de impuestos y de tasas y la supresión de beneficios fiscales). Esta partida representa el 60% del ajuste total (26.608 millones en la versión del Plan Nacional de Reformas). Pero lo que más sorprende es la suave propuesta de reducción de gastos de 17.351 millones hasta 2022, es decir, un 44% de lo que

prevé el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas.

Sobran entes públicos

Uno de los datos más sorprendentes es que, a pesar del compromiso de la Comisión Nacional de Administración Local con el Gobierno de reducir las empresas y entes públicos (hay casi 3.400), los 2.305 ayuntamientos se comprometen a ahorrar unos 2,6 millones de euros. Este ahorro provendrá de «la reducción del número de consejeros en los consejos de administración de las empresas del sector público» y se conseguirá, según los consistorios, durante los 10 años que dura el plan de viabilidad y la vida de los créditos que les asignarán las partidas para pagar las facturas. La media anual conjunta de estos recortes será de sólo 260.000 euros.

Particularmente llamativo es *el esfuerzo* que anuncian por este concepto los 15 ayuntamientos más importantes del país por población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat). La reducción de gasto prevista es de 200.000 euros en consejeros en esos 10 años. Por tanto, el ahorro será de 13.333 euros de media por consistorio en este periodo, lo que significa un ajuste individual de 1.300 euros anuales.

Mientras, por disolver las empresas en pérdidas, este grupo prevé una reducción total de 79,8 millones de gasto (532.000 euros por municipio y año) hasta 2022, así como 52,3 millones por el nuevo régimen retributivo aprobado por el Gobierno para sus empresas (la media individual por corporación es de 350.000 euros al año).

No tiene desperdicio tampoco el dato de que, por limitar los salarios de «la alta dirección o de los contratos mercantiles», el conjunto de municipios sólo estime un recorte de 760.000 euros al año. Mientras, la cifra media de este ahorro es de 153.000 anuales para cada uno de esos 15 ayuntamientos. Para tener una idea del alcance de este compromiso, hay que comparar estos datos, por ejemplo, con los 507 millones que el conjunto de entidades locales empleó en 2009, último dato disponible correspondiente a la liquidación presupuestaria, en pagar a sus altos cargos.

También llama la atención por su escasa ambición que los 2.305 ayuntamientos prevean ahorrarse 133,5 millones en esos 10 años en reducir «el número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local». Es decir, la reducción de gasto estimada es de 13,3 millones al año cuando por ejemplo la totalidad de municipios en España se gastan anualmente en

asesores más de 310 millones anuales. Y a casi 46 millones llegará el ajuste que harán los grandes municipios (unos 300.000 euros de media por consistorio al año) entre su personal de confianza.

Las partidas más importantes en los recortes corresponden a los gastos de personal y corrientes (el 67% del total). Las entidades prevén reducir «sueldos o efectivos» por valor de 5.224 millones (522 millones anuales), de los que unos 670 corresponden a los 15 grandes ayuntamientos (44,6 millones anuales en cada uno).

Pero, esta cifra es insignificante si se compara con el gasto total en personal de los ayuntamientos. La masa salarial de todas las corporaciones locales fue de 21.300 millones en 2011. Por tanto, esos 522 millones anuales de ahorro representan sólo un 2,4% del total de las remuneraciones.

En cuanto a los gastos corrientes, los 2.305 ayuntamientos del plan de proveedores esgrimen una batería de «otras medidas» para ahorrar 6.376 millones (637 millones al año). De ellos, 2.373 millones (el 37%) corresponden a los 15 ayuntamientos más poblados.

Entre estas medidas se apuntan la reducción de vehículos de los parques móviles, el gasto en servicios informáticos y de teléfono, agua, luz, alquileres de inmuebles y la revisión de los procedimientos de contratación, así como de las subvenciones.

Según los datos de 2009, los entes locales en su conjunto destinaron casi 20.000 millones a gastos corrientes (arrendamientos, reparaciones y mantenimiento, así como a material y dietas) y otros 2.600 millones a subvenciones «a familias e instituciones sin fines de lucro», entre las que se emboscan las destinadas a los partidos políticos y los sindicatos, y 550 millones a empresas privadas.
